

Id Cendoj: 38038340012007100530
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Santa Cruz de Tenerife
Sección: 1
Nº de Recurso: 374/2007
Nº de Resolución: 536/2007
Procedimiento: Recurso de suplicación
Ponente: MARIA DEL CARMEN SANCHEZ-PARODI PASCUA
Tipo de Resolución: Sentencia

En Santa Cruz de Tenerife , a 29 de junio de 2007.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS en Santa Cruz de Tenerife formada por los Ilmos. Sres. Magistrados D./Dña. M^a Carmen Sanchez Parodi Pascua (Ponente) (Presidente), D./Dña. Jose M^a Del Campo Y Cullen y D./Dña. Antonio Doreste Armas , ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm. 0000374/2007 , interpuesto por Gloria , frente a la Sentencia del JDO. DE LO SOCIAL N. 5 de SANTA CRUZ DE TENERIFE en los Autos 0000623/2006 en reclamación de DERECHOS-CANTIDAD , ha sido Ponente el ILTMO./A. SR./A. D./DÑA. M^a Carmen Sanchez Parodi Pascua .

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.- Que según consta en Autos, se presentó demanda por Gloria , en reclamación de DERECHOS-CANTIDAD siendo demandado Instituto Nacional De La Seguridad Social y Tesorería General De La Seguridad Social y celebrado juicio y dictada Sentencia, el día 23 de abril 2007 , por el Juzgado de referencia, con carácter desestimatorio .

SEGUNDO.- Que en la citada Sentencia y como hechos probados, se declaran los siguientes:
PRIMERO.- D^a. Gloria , nacida el 3 de octubre de 1951, se encuentra afiliada al Régimen General de la Seguridad Social, con número de afiliación NUM000 , teniendo la categoría profesional de auxiliar de clínica, a la que se dedicaba de forma habitual. SEGUNDO.- Con fecha de 5 de agosto de 2004, se dio de baja por incapacidad temporal, derivada de enfermedad común. TERCERO.- Tras ser dada de alta con propuesta de invalidez el 2 de diciembre de 2005, fue incoado por la Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife del Instituto Nacional de la Seguridad Social expediente para resolver sobre la declaración, en su caso, de incapacidad permanente de D^a. Gloria . El día 21 de febrero de 2006 el Equipo de Valoración de Incapacidades determinó el cuadro clínico residual de la demandante como gonartrosis derecha con prótesis total de rodilla derecha el 5 de agosto de 2004 (cementada). Impotencia funcional con limitación de la flexión a 110º y atrofia de cuádriceps de rodilla derecha, con dificultad para la deambulaci3n. Rotoescoliosis dorso-lumbar. Lumbartrosis. Periartritis escapulohumeral derecha. En cuanto a las limitaciones orgánicas y funcionales, indicó que había limitaci3n para actividades que requirieran bipedestaci3n y/o deambulaci3n prolongadas. Proponiendo en definitiva que se calificara a D^a. Gloria como incapacitada permanente total. CUARTO.- El día 21 de marzo de 2006 la Direcci3n Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó resoluci3n reconociendo a D^a. Gloria una incapacidad permanente total para su profesi3n habitual de auxiliar de clínica, con un porcentaje del 55% sobre una base reguladora de 1.168,11 euros, y efectos económicos a partir del 3 de diciembre de 2005. QUINTO.- D^a. Gloria padece un cuadro de gonartrosis derecha con prótesis total de rodilla derecha. Rotoescoliosis dorso-lumbar. Lumbartrosis. Periartritis escapulohumeral derecha. Tendinitis del supraespinoso. Hipercolesterolemia. Depresi3n mayor, no grave. Síndrome del túnel carpiano bilateral, diagnosticado con posterioridad a febrero

de 2006. Dichas afecciones le producen trastornos del sueño; limitación a la movilidad de la rodilla derecha, no pudiendo la demandante permanecer mucho tiempo deambulando o en bipedestación; limitación a la movilidad dorso-lumbar; terapéuticamente tiene desaconsejado la realización de esfuerzos que puedan descompensar las lesiones

de rodilla, columna u hombro. Pérdida de fuerza y sensibilidad en las manos, derivada del síndrome de túnel carpiano. SEXTO.- La base reguladora de la pensión de incapacidad permanente asciende a 1.168,11 euros. SÉPTIMO.- El día 19 de mayo de 2006 se presentó reclamación previa contra la antes citada resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, denegatoria de la declaración de incapacidad permanente. Dicha reclamación previa fue resuelta, desestimándola, por resolución dictada el día 20 de julio de 2006 .

TERCERO.- Que por el JDO. DE LO SOCIAL N. 5 de SANTA CRUZ DE TENERIFE , se dictó Sentencia, cuyo Fallo literal dice: Debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda presentada por D^a. Gloria , y, en consecuencia, absuelvo a las demandadas Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social de todas las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda .

CUARTO.- Que contra dicha Sentencia, se interpuso Recurso de Suplicación por la parte Gloria , siendo impugnado de contrario. Recibidos los Autos por esta Sala, se formó el oportuno rollo y pase al Ponente. Señalándose para votación y fallo el día 25 de Junio de 2007 .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A tenor de lo establecido en el *apartado b) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral* , recurre la representación de la demandante a fin de revisar el hecho probado quinto y se haga constar: "Doña Gloria padece un cuadro de gonartrosis derecha con prótesis total de rodilla derecha. Rotoescoliosis dorso-lumbar. Lumboartrosis. Periartritis escapulohumeral derecha. Tendinitis del supraespinoso. Hipercolesterolemia. Depresión mayo, no grave. **Fibromialgia** con limitación funcional. Síndrome del túnel carpiano, diagnosticado con posterioridad a febrero de 2006.

Dichas afecciones le producen trastornos del sueño; limitación a la movilidad de la rodilla derecha, no pudiendo la demandante permanecer mucho tiempo en sedestación o en bipedestación; limitación a la movilidad dorso-lumbar; terapéuticamente tiene desaconsejado la realización de esfuerzos que puedan descompensar las lesiones de rodilla, columna u hombro.

Pérdida de fuerza y sensibilidad en las manos, derivada del síndrome del túnel carpiano".

Para ello se apoya en varios informes médicos, motivo que no puede tener favorable acogida al no evidenciar error alguno en lo valorado por el Juzgador de instancia, quien de forma minuciosa y detallada hace referencia, en su fundamento primero, acerca del padecimiento sobre el cual pretende introducir la revisión antedicha.

SEGUNDO.- En vía de censura jurídica y al amparo de lo preceptuado en el *art. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral* , recurre la indicada representación por infracción del *art. 137 de la Ley General de la Seguridad Social* .

Esta Sala tiene dicho que la revisión jurisdiccional de las declaraciones administrativas de incapacidad laboral, en sus diversos grados, no pueden seguirse criterios rígidos ni generales, sino que, por el contrario, deben ponderarse y valorarse, en cada caso concreto, las lesiones, taras o secuelas que han quedado consolidadas en el trabajador y ponerlas en relación con las principales tareas y funciones que el citado trabajador realiza con los quehaceres propios de su categoría laboral. Por ello, la abundante casuística de la doctrina de los Tribunales Laborales no tiene mas que un valor orientativo, que ayuda eficazmente a la Sala Sentenciadora.

En sentencia 4/95 (Aranzadi 56/95) ha indicado: "Es preciso traer a colación la doctrina que esta Sala ya mantuvo en la Sentencia de 18 de Noviembre de 1993 : "conviene señalar, que la Jurisprudencia viene destacando -con reiteración- entre otras en las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 12 de Junio y 24 de Julio de 1986 , el carácter esencial y determinante de la profesión en la calificación jurídica de la situación residual del afectado; de tal manera, que unas mismas lesiones y secuelas pueden ser constitutivas o no de invalidez permanente en función del presunto incapaz, dado que en concreto y con respecto a los grados de incapacidad permanente parcial y total, los *números 3 y 4 del Art. 135 de la Ley*

General de la Seguridad Social de 30-5-1974, los refieren a la profesión habitual, debiendo declararse dichos grados de incapacidad cuando las lesiones o secuelas impidan en el caso de la incapacidad total o menoscabo en el supuesto de la parcial, el desempeño de las tareas propias de la actividad habitual con la profesionalidad, dedicación y constancia que la relación laboral exige.

Es reiterada doctrina jurisprudencial según señala la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19-10-92 y de otras Salas de lo Social de diversos Tribunales Superiores de Justicia (SS11-3-1991/Asturias, 9-3-1992/La Rioja, concordantes con la establecida por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo SS 2-11-1978, 24-7-1986 y 9-4 -1990, la de que a los efectos de la declaración de una invalidez permanente como total debe partirse de que: a) La valoración de la invalidez permanente ha de realizarse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales limitaciones son las que determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia. b) Han de ponerse en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de la tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión. c) La aptitud para el desempeño de la actividad laboral "habitual", de un trabajador, implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma, con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia, y sin que el desempeño de las mismas genere "riesgos adicionales o superpuestos" a los normales de un oficio o comporte el sometimiento a una "continua situación de sufrimiento" en el trabajo cotidiano. d) no es obstáculo a la declaración de tal grado de incapacidad el que el trabajador pueda realizar otras actividades distintas, mas livianas o sedentarias, o incluso pueda desempeñar tareas "menos importantes o secundarias de su propia profesión habitual o cometidos "secundarios o complementarios" de ésta, siempre que exista una imposibilidad de continuar trabajando en dicha actividad y que conserve una aptitud residual que "tenga relevancia suficiente y trascendencia tal que no le impida al trabajador concretar relación de trabajo futuro, y que e) debe entenderse por profesión habitual no un determinado puesto de trabajo, "sino aquella que el trabajador está cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional".

TERCERO.- Como esta Sala ya ha tenido ocasión de reiterar, "el proceso laboral es un procedimiento judicial de única instancia en el que la valoración de la prueba es función atribuida en exclusiva al Juez "a quo", de modo que la Suplicación se articula como un recurso de naturaleza extraordinaria que no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado, e incluso en estos casos, de manera muy restrictiva y excepcional, en la medida en que únicamente puede modificarse la apreciación de la prueba realizada por el Juez de lo Social cuando de forma inequívoca, indiscutible y palmaria, resulte evidente que ha incurrido en manifiesto error en la valoración de tales medios de prueba.

En cualquier otro caso, debe necesariamente prevalecer el contenido de los hechos probados establecido en la sentencia de instancia, que no puede ni tan siquiera ser sustituido por la particular valoración que el propio Tribunal pudiere hacer de esos mismos elementos de prueba, cuando el error evidente de apreciación no surge de forma clara y cristalina de los documentos o pericias invocados en el recurso.

La vigente *Ley de Procedimiento Laboral* ha recogido expresamente esta doctrina en su artículo 97.2, al disponer que la sentencia, apreciando los elementos de convicción, habrá de declarar expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión.

De lo que se desprende, que la apreciación de la prueba es facultad que corresponde al órgano judicial de instancia, que debe ser libremente ejercitada por el mismo, con el único requisito de que no resulte arbitraria, ilógica, irracional y absurda y se encuentre además debida y suficientemente motivada, tal y como esta Sala ya destacaba en su Sentencia de 28 de enero de 1994, siguiendo la de Tribunal Constitucional 14/1991 de 28 de enero en la que se señala que, "la obligación de motivar las Sentencias que el art. 120.3º de la Constitución impone a los órganos judiciales, puesta en conexión con el derecho a la tutela judicial protegido por el art. 24.1º de la propia Constitución - entendiendo como derecho a una resolución jurídicamente fundada-, conduce a integrar en el contenido de esta garantía constitucional el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales y, por tanto, el enlace de las mismas con la Ley y el sistema general de fuentes, de la cual son aplicación". Y para cumplir este mandato no es necesario que los razonamientos hayan de ser exhaustivos y pormenorizados, pero sí suficientes para justificar los motivos de la convicción judicial en cuanto a la realidad de los hechos que plasma, que no pueden aparecer como una arbitraria conclusión, puesto que la facultad de valoración de la prueba atribuida al Juez de instancia no significa una apreciación infundada o discrecional, y su libertad no es absoluta sino condicionada dentro de ciertos límites, al combinarse en nuestro ordenamiento civil y laboral los sistemas de prueba legal y de prueba libre, debiendo actuar en todo momento con sometimiento a las reglas de derecho

y de la razón, optando, cuando existe una colisión entre el contenido de los diversos elementos probatorios, por aquellos que le ofrezcan, en función de su eficacia, una mayor garantía de certidumbre y poder de convicción para acreditar cumplidamente los fundamentos de derecho (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1985); sin que por lo tanto la libertad del órgano judicial en la valoración de la prueba suponga aceptar la más absoluta soberanía o admitir que el Juez ha de seguir sus conjeturas, impresiones, sospechas o suposiciones (Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1989 de 20 de febrero); debiendo, en todo caso, respetarse las normas de valoración tasada de pruebas que contiene nuestro ordenamiento jurídico".

CUARTO.- Pretende la trabajadora en su recurso, le sea reconocida una invalidez absoluta frente a la total que le declara la Seguridad Social y que el Juzgador ha ratificado.

El recurso de suplicación no ha venido a desvirtuar el convencimiento al que ha llegado el Juzgador de instancia, tras la valoración de la prueba practicada conforme a los principios de la sana crítica y las facultades que le vienen conferidas en el *art. 97.2 de la invocada ley procesal*.

El Magistrado a quo ha puesto de relieve que los informes médicos no excluyen la capacidad laboral de la demandante y aunque ésta se encuentre mermada, no está eliminada totalmente, de lo que se deduce que al no quedar acreditado que la demandante no pueda realizar un trabajo de carácter sedentario, habrá que desestimar el recurso de suplicación y confirmar la sentencia de instancia.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación, interpuesto por Gloria contra la sentencia del Juzgado de lo Social de referencia de fecha 23 de abril de 2007 , en virtud de demanda interpuesta por Gloria contra Instituto Nacional De La Seguridad Social y Tesorería General De La Seguridad Social en reclamación de DERECHOS-CANTIDAD y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia .

Devuélvanse los autos originales al JDO. DE LO SOCIAL N. 5 de SANTA CRUZ DE TENERIFE , con testimonio de la presente una vez notificada y firme a las partes y con advertencia a las mismas de que contra la presente Resolución podrá interponer sólo Recurso de Casación para Unificación de Doctrina, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los *artículos 219, 227 y 228 de la Ley Procesal Laboral, advirtiéndose, en relación con los dos últimos preceptos citados*, que el depósito de los 300,51 euros (50.000 ptas.) deberá efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella y en su cuenta nº 2410 del Banco Español de Crédito, Oficina 1006 de la calle Barquillo nº 49, 28004 de Madrid, por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, mientras que la consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la c/c nº 3777 que esta Sala tiene abierta en el Banco Español de Crédito, Oficina 1101, de la calle Villalba Hervás, 12, 28002 de Sta. Cruz de Tenerife, haciendo constar el *código nº 66 (Recursos de Casación Laboral)* y a continuación número y año del rollo de suplicación, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Remítase testimonio a la Fiscalía de la Audiencia Provincial y librese otro testimonio para su unión al rollo de su razón, incorporándose original al Libro de Sentencia.

Así por esta nuestra Sentencia, que es firme, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior Sentencia, por el Ilmo/a. Sr/a Magistrado/a Ponente, que la suscribe en el Sala de Audiencia de este Tribunal. Se envía testimonio a la Audiencia Provincial, en unión del correspondiente oficio de remisión. Doy fe.